

Los “hombres del presidente” contra el Estado salvadoreño Poderes paralelos colapsan la institucionalidad*

El editorial anterior (695), dedicado a reflexionar sobre la estructura fiscal del país, concluye que el Estado salvadoreño adolece de una grave debilidad. Pero esta no se refleja sólo en su escaso poder para recaudar los recursos necesarios para financiar el gasto público, sino que también se pone de manifiesto en otros aspectos igual de críticos. Además de la baja recaudación fiscal, el gobierno salvadoreño ha perdido el control sobre el territorio nacional, así como también sobre algunas actividades económicas o sectores sociales. En este sentido, no sólo el crimen y la violencia se encuentran descontrolados, sino que también esas otras actividades y sectores sociales. La reforma neoliberal desató unas fuerzas muy poderosas, las cuales no sólo se han desbocado, sino que, además, han hecho colapsar la institucionalidad.

Su poder destructivo, así como su capacidad para adaptarse y reaccionar a la respuesta gubernamental colocan en entredicho al llamado modelo salvadoreño de paz y desarrollo. Un proceso con los niveles de ilegalidad y corrupción como el salvadoreño, donde la violencia es generalizada y cuya cantidad de asesinatos coloca al país en los primeros lugares de la lista mundial de homicidios no puede ser modelo para nadie. Ciertamente, hablar de paz con un promedio de once homicidios diarios es irónico. En este contexto, no es apropiado hablar de desarrollo, sino de crecimiento económico y sólo desde los intereses del capital corporativo. El Salvador puso fin a una guerra civil, pero entró en otra guerra, una especie de guerra consigo mismo, tanto o más destructiva y cruel que la anterior.

La política económica, diseñada para procurar un mayor ritmo de acumulación, en unos cuantos enclaves privilegiados, no contaba con el desencadenamiento de estas fuerzas que ahora desintegran el Estado. Al contrario, dio por asumida la estabilidad social y la legitimidad del poder. En sus planes no entraba el surgimiento de poderes paralelos que carcomieren la institucionalidad. Las siguientes reflexiones sobre estos poderes paralelos y su impacto en el Estado y la sociedad están en continuidad con las del editorial anterior.

* Editorial, pp. 925-937.

1. Los grupos paralelos de poder

La pérdida de territorio es quizás la prueba más evidente de la descomposición actual del Estado salvadoreño. Durante la guerra civil, las guerrillas se apoderaron de un tercio del territorio nacional y ejercieron soberanía sobre él, hasta su reintegración, al finalizar el conflicto. De esta manera, durante años, hubo dos territorios con fronteras claramente marcadas, en cuyo interior predominaban poderes político-militares diversos, cada uno con sus propias normas de conducta. Quince años después, el surgimiento y la consolidación de varios poderes paralelos al del Estado han vuelto a desintegrar el territorio. Su mera existencia ya constituye un desafío para este. Bandas armadas, vinculadas a las pandillas y a otros grupos delincuenciales, por lo general armadas, controlan extensiones distintas del territorio nacional, en las cuales impera su ley y recaudan dinero por conceptos diversos. En cambio, el gobierno nacional experimenta serias dificultades para recaudar los impuestos. Es así como porciones variables del territorio urbano y rural están bajo control directo de estas bandas armadas. La autoridad estatal sólo hace acto de presencia en ellas de forma esporádica. Su ausencia permanente hace que esa autoridad, para efectos prácticos, sea inexistente en estos territorios. En realidad, carece de la formación y de los medios adecuados para ejercer su poder e imponer el orden público. Su poder es más formal, o constitucional, que real. Abandonados a su suerte, los habitantes de estos territorios se han visto obligados a aceptar el orden impuesto por quien detenta el poder real, para escándalo de las autoridades estatales que, por otro lado, no ofrecen alternativa. Otros, en cambio, desesperados, han cerrado sus negocios o han abandonado sus viviendas, las cuales han pasado a ser ocupadas por los delincuentes. De esta manera, se comienza a producir un nuevo desplazamiento de población aterrorizada. Ya hay centros educativos abandonados o que operan de forma irregular. Algunos sectores profesionales tampoco están libres de esta amenaza. La empresa privada reconoce sin rodeos que ha recortado sus rutas de distribución por falta de Estado. Se trata, pues, de territorios literalmente “independientes” o “liberados”.

La organización criminal —pandillas, narcotráfico, tráfico de personas y bienes, lavado de dinero, etc.— se ha consolidado como uno de estos poderes, con control efectivo sobre el territorio o con libertad para llevar a cabo sus operaciones. Evolucionó y acumuló poder sin que nadie se lo impidiera. Desde hace tiempo, arrebató la iniciativa al gobierno de ARENA. O dicho en el lenguaje coloquial de este último, el diablo lleva bastante delantera a los defensores de los buenos, o los malos ciudadanos aventajan por mucho a los buenos y a sus autoridades. La pérdida de la iniciativa coloca a la policía y a las autoridades gubernamentales en una posición desventajosa. Sólo poseen capacidad para reaccionar tarde, lo cual significa improvisación y poca incidencia. Nunca han pretendido otra cosa. Pero así se explica que el crimen organizado se haya desarrollado y fortalecido. En estas condiciones de inferioridad es imposible ganarle la batalla. Hasta ahora, la inseguridad empujó la popularidad de los presidentes de ARENA hacia arriba y produjo réditos electorales valiosos para este partido. Pero la sociedad que padece las consecuencias de estos cálculos políticos de corto plazo, comienza a dar señales de cansancio y a exigir resultados a los

responsables de su seguridad. Incluso las gremiales de la gran empresa privada, por lo general, discretas ante los fracasos gubernamentales, han comenzado a expresar de forma abierta su impaciencia ante el aumento imparable del crimen y la elevación de los costos de la seguridad privada —el 11 por ciento del producto interno bruto—, mientras el gobierno ensaya un plan tras otro sin encontrar la respuesta adecuada. Hasta el embajador de Estados Unidos, haciendo uso de un recurso extraordinario, una vez fracasada la vía diplomática, ventiló en público las preocupaciones de su gobierno y exigió resultados inmediatos.

La desesperación impulsa a mucha gente a tomar las armas, pensando que así garantiza su seguridad, cuando, en realidad, corre mayores riesgos. Simultáneamente, ha levantado muros, ha impedido con barreras la libre circulación en áreas públicas y ha establecido controles privados, con lo cual el territorio urbano cada vez se fragmenta más en cotos exclusivos. Otras iniciativas más positivas hacen caso omiso de las autoridades de seguridad pública y asumen esta función de forma comunitaria y mucho más eficaz, a juzgar por los resultados. El alcalde de Nueva Guadalupe asumió el papel de comisario con el beneplácito de la comunidad local y, en virtud de ello, dirige las acciones policiales del municipio, las cuales incluyen la supervisión del desplazamiento de la población. De esta forma, ha llenado el vacío de liderazgo dejado por las autoridades de seguridad pública. El alcalde de San Martín fue más allá y prohibió la circulación de armas de fuego en sitios públicos como plazas, instalaciones deportivas, restaurantes y mercado. Estableció canales de comunicación con la juventud y organizó eventos culturales, religiosos y deportivos en aquellos sitios donde la violencia incidía más. El impacto fue casi inmediato. Los homicidios se redujeron a la mitad, después de ser uno de los municipios del país con uno de los índices más alto; asimismo disminuyeron los lesionados con armas de fuego y la población se siente ahora más segura. La combinación del liderazgo local, la participación de la comunidad, la inclusión de la juventud y la prohibición de las armas de fuego y el control del consumo de alcohol redujeron de inmediato los hechos violentos y crearon seguridad comunitaria. El alcalde de Santa Tecla también ha prohibido las armas de fuego en los sitios públicos. Otras iniciativas, como la del alcalde de San Miguel, son más aventuradas. Para sorpresa e irritación de las autoridades de gobernación, propuso negociar con las bandas armadas el cese de las extorsiones. Con este planteamiento, además de explorar vías para acabar con uno de los flagelos más destructivos de uno de los poderes paralelos, el alcalde intenta impulsar su carrera hacia la presidencia. Nada extraño, puesto que el contexto del crimen organizado y de la violencia es propicio para el surgimiento de los caudillismos.

Mientras tanto, el legislador se afana, incansable, en revisar los códigos, recortar las garantías y aumentar las penas. Su creatividad para proponer restricciones legales parece ser inagotable. Funcionarios y legisladores se esmeran por aparecer rigurosos e incluso intolerantes con el delito, pero no tienen poder para hacer efectivas sus propias disposiciones. Su debilidad fundamental es su incapacidad para ponerlas en práctica. Ni siquiera su reacción preferida, el encarcelamiento de los pandilleros, el prototipo del criminal peligroso, ha dado el resultado esperado. Abarrotó las cárceles

La hegemonía indiscutida del Estado salvadoreño pertenece al pasado. El vacío dejado por su desaparición ha sido llenado rápidamente por otros poderes, como las bandas armadas, el capital transnacional, el sector informal y el transporte público y pesado.

con pandilleros, pero estos se apoderaron de ellas. En la actualidad, las autoridades estatales sólo controlan, y relativamente, los perímetros de los centros de detención. En su interior, la ley que gobierna la vida de los reclusos es la de los pandilleros. Pero incluso el perímetro es vulnerable, pues cuando los reclusos se lo proponen, se escapan por túneles y boquetes a través de las paredes. A diferencia del legislador y de la autoridad estatal, las bandas armadas tienen poder para imponer su ley en aquellos territorios bajo su control. Cuando sus disposiciones no son acatadas, la sanción

más general es la ejecución sumaria. Los testigos o los colaboradores de la policía también se encuentran sometidos al mismo régimen. Esta es la gran diferencia entre la eficacia del poder formal y la del poder real. En su desesperación, el gobierno ha tolerado, si no es que ha incluso patrocinado, el resurgimiento de los grupos de exterminio social, cuya huella inconfundible está impresa en el cadáver de sus víctimas.

Las bandas armadas, sin embargo, no son el único poder paralelo al Estado. Poderes similares se han consolidado, ante su impasibilidad. Algunos de ellos incluso gozan de reconocimiento legal. Las empresas transnacionales, pese a operar bajo ciertas normas, en la práctica, hacen caso omiso de ellas. Hasta el mismo presidente Saca ha expresado su inconformidad por la forma como irrespetan la ley. La legislación que regula las operaciones de las empresas que adquirieron los servicios públicos es bastante aceptable. Pero esa no es la cuestión, sino que el gobierno de ARENA renunció a controlar sus actividades, desde el momento de su privatización. Así como también ha renunciado a evitar la conformación de monopolios y oligopolios, aunque, en teoría, promueve y garantiza la competencia. Tampoco hay una ley que, en realidad, proteja al consumidor. Al renunciar voluntariamente a sus facultades para intervenir, supervisar y cortar el abuso, el gobierno entregó su poder. El problema no radica, pues, en la falta de legislación ni en su claridad, ni tampoco en su obligatoriedad, sino en una cuestión de poder. Aun cuando la legislación respalde la intervención de la autoridad pública, el gobierno es impotente, ya sea porque no está dispuesto a enfrentar a los grandes empresarios, ya sea porque no se ha preocupado por adquirir la capacidad técnica para hacerlo. En la práctica, las fuerzas económicas, sobre todo las de los grupos corporativos, se desenvuelven sin mayor estorbo. Son fuerzas que el mismo gobierno desató, guiado por su fe ciega en el mercado y también por una buena dosis de ingenuidad, puesto que los fines del mercado son la rentabilidad y la acumulación y no equilibrar o redistribuir los recursos.

El gobierno de ARENA tampoco controla, por la misma razón, a un sector informal en constante expansión. A lo largo de los últimos años, este sector ha acumulado tal fuerza, que es incontrolable para la policía y los gobiernos locales. El fisco nunca ha podido recaudar impuestos en su interior. Así, pues, las actividades informales, de hecho, están exentas; pero, además, en su seno tienen lugar transacciones ilegales —desde el intercambio

de bienes introducidos de contrabando hasta los robados y aquellos como la pornografía de toda clase, los estupefacientes, los medicamentos, etc.—. Se ha apoderado de calles y plazas, territorios públicos que considera suyos y en los cuales impera su ley, sin que nadie pueda impedirselo. El control sobre este espacio lo enfrenta esporádicamente con los gobiernos locales, interesados en recuperarlos para su uso original y en restablecer el orden en ellos. En esto, los primeros no cuentan con la colaboración de la policía por indolencia y también porque algunos miembros del sector son informantes activos. Otro motivo de enfrentamiento es la reproducción y comercialización de material audiovisual, un elemento muy sensible para las transnacionales y, por lo tanto, un compromiso exigido con fuerza por el gobierno estadounidense, en virtud del tratado de libre comercio. Menos preocupa la reproducción y comercialización de libros y algo más la comercialización de vestuario de marca. Con todo, la represión policial o fiscal es esporádica. Ciertamente, no impide el desarrollo y la expansión de la actividad informal.

El transporte público es otra actividad donde la autoridad gubernamental brilla por su ausencia. A diferencia del sector informal, existe legislación específica, aunque en perenne reforma, pero siempre para responder a las demandas de los grandes empresarios del sector y no a sus usuarios. Una dependencia del Ministerio de Obras Públicas, cuyo fundamento legal está incluso cuestionado, y una división especializada de la policía son las encargadas de vigilar el tránsito. Sin embargo, ninguna de ellas tiene poder para exigir el cumplimiento de las normas vigentes. El sector no sólo opera de forma corrupta y anárquica, sino que es el principal responsable del frecuente caos en calles y carreteras, donde impera por la fuerza y donde, en consecuencia, los accidentes fatales son comunes. Esta es otra apropiación violenta del espacio público, que incluye aparcamientos y talleres mecánicos. Paradójicamente, el vacío dejado por la autoridad estatal ha sido llenado por las pandillas y los extorsionadores, que mantienen en jaque continuo a estas empresas, al punto de someterlas a su ley. Otra actividad fuera de control es el transporte pesado, uno de los elementos estratégicos de la política de desarrollo económico, cuya meta es convertir el país en una plataforma de servicios. Mientras los gobiernos de ARENA se esmeran en dotar al país de infraestructura vial de primer mundo, el transporte público y el pesado se encargan de volverla obsolescente casi de inmediato.

La hegemonía indiscutida del Estado salvadoreño pertenece al pasado. El vacío dejado por su desaparición ha sido llenado rápidamente por otros poderes, como las bandas armadas, el capital transnacional, el sector informal y el transporte público y pesado. La ciudadanía desprotegida o abandonada por el Estado también se ha colocado con pasmosa tranquilidad al margen de la institucionalidad y de su legalidad, pues sabe que la posibilidad de una sanción es remota. Pero de esta forma, contribuye al desorden general del cual intenta protegerse con armas de fuego, al mismo tiempo que arriesga su propia vida. La población teme más a los poderes paralelos que sí atentan contra su seguridad y su estabilidad que a las amenazas de los representantes de la institucionalidad. El único poder efectivo del gobierno y, en particular, del presidente Saca es el mediático,

pero este no basta para someter a los poderes paralelos que cuestionan su autoridad formalmente legítima, mientras, en la práctica, la vida nacional se encuentra a la deriva.

La insistencia en la legislación que pretende contrarrestar algunos de estos poderes, sobre todo el criminal, es un buen indicador de la incapacidad gubernamental. Cada modificación de la legislación, orientada a endurecer penas o a recortar garantías ciudadanas, significa un retroceso ante estos poderes. La pérdida de terreno es mayor cuando el gobierno crea nueva legislación. Pensar que podría recuperarlo a golpes de legislación, acompañados de efectos mediáticos, es un error. De hecho, entre más dura la ley, mayor la incapacidad y menor el temor que suscita, y, por lo tanto, su poder de contención es nulo. La medida de su incapacidad está dada por la modificación o la creación de una ley.

2. El Salvador de los múltiples países

El lema escogido por el gobierno de ARENA para su publicidad sobre la independencia de este año, no por irónico, deja de afirmar, sin pretenderlo, una gran verdad sobre El Salvador. No existe un solo país, sino que existen muchos El Salvador. El lema en cuestión se hace eco del que proclama la bandera nacional, “Dios, unión, libertad”. Jugando con estas tres palabras, el publicista oficial anunció, en este septiembre, “Un país unido por la libertad”. Pero el país del cual predica la unidad es ilusorio. No existen un territorio y una ciudadanía sin más, sobre los cuales el Estado ejerza su soberanía. En El Salvador de hoy conviven dos países, aquel cuyo territorio está delimitado por unas fronteras, reconocidas por el derecho internacional, en el cual vive una ciudadanía bajo la soberanía de un Estado, representado en Naciones Unidas, y otro que está disperso por Estados Unidos, Canadá, Australia, México, Italia y tantos otros lugares, donde residen millones de salvadoreños, gobernados por estados y leyes diferentes, pero que no olvidan su origen.

Los poderes paralelos que operan en el territorio nacional complican el panorama. Cada uno se ha conformado como unidad parcial, a veces incluso enfrentada al Estado. En cada una de esas parcialidades opera un poder, tal vez pequeño, pero muy fuerte, sobre el cual ejerce soberanía. Constituyen una especie de territorios “liberados” del Estado, en los cuales este no es más que una formalidad y, por lo tanto, su autoridad es inexistente. En algunos casos, la lógica del poder prevaeciente desborda las fronteras de tales territorios. De esta forma, las pandillas y el crimen organizado, al igual que el capital, se globalizaron y adquirieron una dimensión transnacional, lo cual fortalece su organización y su capacidad operativa. La riqueza como valor absoluto, el principio fundamental de la política de los gobiernos de ARENA, y, por lo tanto, el recurso a cualquier medio para conseguirla y acumularla, en teoría, sólo aplicable al gran capital, fue retomado y llevado hasta sus últimas consecuencias, de forma imprevista, por otros poderes paralelos. Estos aprendieron bien la lección y la pusieron en práctica de forma intachable. En consecuencia, se permitieron no sólo el recurso a la ilegalidad, tal como lo hacía el gran capital con la connivencia gubernamental, sino que fueron más allá y también

usaron el crimen como método válido para alcanzar el ideal de ARENA y sus socios. Por lo tanto, la trasgresión e incluso el asesinato se generalizaron como medios aceptables para enriquecerse. El Estado, que voluntariamente abandonó la institucionalidad para facilitar a unos pocos la satisfacción de sus ambiciones de riqueza, sin más barrera que su limitación humana, quedó reducido, imprevisiblemente, a la impotencia, despojado de su autoridad y de su poder para contener a otras fuerzas disociadoras. Estas, sin mucho esfuerzo, aprovecharon la oportunidad que les brindaba un Estado débil. La sociedad, en su conjunto, presa de una combinación de miedo, impotencia y exclusión, también fue empujada a la ilegalidad como medio para sobrevivir y para defenderse.

El gobierno de ARENA todavía no ha realizado las implicaciones de su condescendencia con el gran capital. Es así como ahora se encuentra con que debe administrar un territorio controlado por poderes fácticos o paralelos. El candor de sus actitudes revela su ignorancia, o su miopía. Quizás su obsesión con el futuro lo lleva a levantar la mirada demasiado lejos y demasiado alto, tanto como para menospreciar la realidad cotidiana. La unidad, el orden y el progreso sólo existen en el país irreal de su discurso. Es un país atractivo para la inversión, el turismo o el retiro, un país de encantos y ensueños. Casi pareciera que una de las tareas de este gobierno es mantener vivo este país ilusorio.

La perspectiva social, sin embargo, ilumina otros dos países, el de los grandes centros comerciales y el marginado de ellos, por falta de poder para consumir lo que ahí se exhibe. El país del ocio, donde se practican los deportes extremos caros, permisibles sólo a los adinerados, y el país del agobio y la incertidumbre. El país de las vistosas revistas de la prensa matutina y el país de las páginas nacionales de esos mismos periódicos. El primero es el país de las fantasías, fabricado por los creativos de los gobiernos de ARENA. Sus habitantes se ocupan en disfrutar al máximo los privilegios que su dinero puede comprar. A este país sólo pertenecen unos pocos, aun cuando se mantenga que con esfuerzo y tesón cualquiera puede obtener la visa para entrar y residir en él. La mayoría de la población está excluida o relegada a otro país, donde la vida es vivida en el límite. Sus habitantes están preocupados por conservar el empleo, conseguir el sustento diario, pagar facturas y deudas que, junto con los intereses, se acumulan de forma constante; por regresar sanos y salvos al hogar, después de la jornada laboral, etc. Es el país donde la exclusión y la desigualdad son vividas en grado máximo. Este país es el más real, porque es el de la mayoría, cuyas necesidades básicas cada día están más insatisfechas. En este país no hay tiempo para el ocio, porque la preocupación por sobrevivir lo ocupa todo. Es el país al cual empresarios y políticos dicen servir, pero del cual todos los poderosos, incluidos los poderes paralelos, se sirven. Es la principal fuente de alimentación de la emigración hacia el norte. Y es el país menos considerado al momento de decidir las políticas sociales y económicas.

Este país desarticulado, o desgarrado, y, con frecuencia, enfrentado consigo mismo es un despropósito. Por eso, sus habitantes buscan cómo poner tierra de por medio, aunque nunca lo olvidan del todo. Pero al cual

no piensan regresar a vivir, una vez salidos de él. El Salvador "unido" de la publicidad gubernamental es un dislate. La afirmación de uno de estos países es la negación dialéctica del otro. El reconocimiento de uno implica el desconocimiento del otro. En El Salvador "unido" del discurso sólo encuentran cabida la pequeña minoría empresarial transnacional y aquellos que la admiran o ansían ser como ella, pero siempre son más pocos que muchos. La mayoría de estos últimos aspira a emigrar al norte. Sin embargo, el gobierno de ARENA los incluye a todos, sin distinciones, en su país imaginario. La única distinción que reconoce es la de los "buenos salvadoreños", los amantes de la paz y del orden, opuestos a los "malos salvadoreños", los inconformes, que protestan y se rebelan contra el orden establecido, los sospechosos de ser delincuentes o, peor aún, terroristas. Los primeros son bien recibidos, mientras sean dóciles, abandonen el país, envíen remesas y no regresen deportados; los otros son considerados como un estorbo incómodo, pero irrelevante. Sin embargo, el rumbo adoptado por las fuerzas que desgarran el país es de tal envergadura que ya es imposible continuar desconociendo sus protestas y sus exigencias de un cambio de rumbo.

Así, pues, no existe un país único, sino múltiples países, dentro y fuera de las fronteras oficiales. Ante esta realidad verificable, cabe preguntarse qué se encuentra unido y cómo está unido. Es evidente que ninguno de los múltiples países existentes está unido por el Estado salvadoreño, en cuanto constituyen territorios "liberados". Más aún, algunos de ellos incluso se encuentran enfrentados, o en guerra, con él. La unidad, supuestamente para la

libertad, es un supuesto gratuito de la construcción ideológica del discurso gubernamental. La inmensa mayoría de quienes se fueron y se siguen yendo, no decidieron con libertad, sino que fueron forzados a huir para sobrevivir. La inmensa mayoría que dentro del Estado formal percibe la porción menor de la riqueza nacional, tampoco es libre para consumir. Ni siquiera tiene acceso a la canasta básica. Deseos no le faltan, necesidad tampoco, pero no tiene con qué. El capital corporativo sí es libre para acumular riquezas sin tropiezos y, además, no tiene pudor para exhibirla, pues sueña con ser parte del primer mundo. Para este capital, El Salvador todavía es un éxito incuestionable y un modelo de paz y desarrollo. Por consiguiente, en el mejor de los casos, la libertad que unifica sólo tendría un sentido muy restringido, pues a la mayor parte de la ciudadanía no le es permitido gozar de ella.

Con todo, la identificación con una nacionalidad salvadoreña bastante genérica, más

simbólica que real, proporciona cierto sentido de pertenencia y de unidad nacional. Su concreción más evidente tiene lugar el mes de septiembre de cada año. En este mes, el calendario oficial marca el nacimiento del Estado formal, el cual es conmemorado con una fiesta conservadora, fijada en el

No existe un solo país, sino que existen muchos El Salvador. [...] En El Salvador de hoy conviven dos países, aquel cuyo territorio está delimitado por unas fronteras, reconocidas por el derecho internacional, en el cual vive una ciudadanía bajo la soberanía de un Estado, representado en Naciones Unidas, y otro que está disperso por Estados Unidos, Canadá, Australia, México, Italia y tantos otros lugares, donde residen millones de salvadoreños gobernados por estados y leyes diferentes, pero que no olvidan su origen.

pasado y con pocos referentes en la realidad presente. En este tiempo se rescata la idea de nación salvadoreña, construida a finales del siglo XIX, con el propósito de dotar de identidad al Estado recién fundado. Pero el fervor que despierta la festividad, no puede ocultar la obsolescencia de la unidad celebrada. La lejanía de los hechos impide poner en evidencia cuánto de construcción imaginada subyace en esa idea, al mismo tiempo que facilita la identificación con una patria funcional. La ausencia de referentes reales, del pasado y del presente, la hace aceptable a los habitantes de los múltiples países, territorios o poderes que se identifican a sí mismos como salvadoreños. La identificación con esa identidad no es problemática para ninguno de ellos. Su vaciedad puede admitirlos a todos sin distinción y todos se sienten cómodos en ella. Por eso, año con año, el ritual se repite invariable, acompañado del mismo discurso, ilustrado con las mismas imágenes y los mismos despliegues. Pero lo que cuenta, para cumplir con su función social fundamental, es la intensidad de las emociones que despierta.

Los símbolos tradicionales de la nacionalidad —la bandera, la oración que la enaltece y el himno que la canta— reemplazan la unidad real y el consenso social. A menos consenso y más conflicto social, más necesidad de sentir una unidad que descansa en los lazos de la nacionalidad. La fiesta nacional es celebrada tanto dentro como fuera del país y dentro, la celebran casi todos los integrantes de los diversos territorios “independientes”, aun aquellos con complejas proyecciones transnacionales como el capital corporativo o los pandilleros. Estos últimos se consideran tan salvadoreños como el gran empresario o el funcionario de ARENA. Es más, el pandillero lleva el nombre de El Salvador, o sus símbolos, marcado de forma indeleble, en su propia piel. El gran empresario hace ondear la bandera en lo alto de las edificaciones y los vehículos que proclaman su riqueza y su poder. Pero su fervor nacionalista, uno de los más intensos, no incluye invertir su capital en el desarrollo nacional o promover la redistribución de la riqueza, elevando la carga fiscal. Su capital va ahí donde es más rentable y no donde la nación celebrada con tanto orgullo lo demanda con urgencia. En esos días, la bandera nacional ondea alto en aquellos sitios menos identificados con el destino de la mayoría de la población salvadoreña. El inmigrante indocumentado invoca la identidad salvadoreña con la misma intensidad con la que lo hace el funcionario que los descalifica por ilegal o lo condena de antemano como delincuente peligroso. Los grupos de limpieza social también recurren al deber patriótico como justificación suficiente para sus acciones de exterminio. El alto funcionario promete desvivirse por la patria, al mismo tiempo que saquea sus exiguas arcas. La sinceridad de esta identidad nacional es muy discutible, pero esa no es la cuestión, sino la idea de unidad que suscita en quienes la aceptan, sin hacerse problema sobre su realidad o su sentido.

Esta identidad se agota en sí misma. Pasada la fecha de la conmemoración, el fervor se difumina tan rápido como surge. Es una fiesta breve, de apenas dos semanas, pero con calado suficiente como para reforzar una falsa idea de unidad nacional. Tendría trascendencia si derivara en un compromiso para construir la unidad de la nación salvadoreña, a partir de una distribución más equitativa de su riqueza, del respeto incondicional de

los derechos ciudadanos, de una institucionalidad fuerte y de la igualdad ante la ley. La unidad es tan efímera como la que suscitan los encuentros deportivos de la selección nacional de fútbol. En este deporte, reconocido oficialmente como nacional, pesa cada vez más la identificación con los dos equipos grandes de la liga española que con los equipos salvadoreños. No hay, pues, que llevarse a engaño, los vínculos que unen a las poblaciones de los diversos El Salvador son emotivos. Precisamente, como las brechas que los separan y los enfrentan son cada vez más visibles y conflictivas, mayor es la necesidad de compensar la desunión o la fragmentación.

3. El gran capital desata fuerzas destructivas

Los poderes paralelos, al mismo tiempo que fragmentan el país en territorios “liberados”, reducen el Estado a la impotencia. En este momento, aun cuando lo intentara con voluntad política firme, el Estado no tiene fuerzas para reaccionar y, al menos, reconstituir su unidad política y social. Mientras este problema estructural no sea resuelto, la exploración de las posibles vías de respuesta a los desafíos planteados por la desarticulación del poder será infructuosa. La impotencia actual está directamente relacionada con el poder de los pocos grupos corporativos que mantienen secuestrado al Estado. Al mantenerlo bajo su tutela, para garantizarse la continuidad de los privilegios y la exclusividad de las oportunidades, han provocado su desarticulación y, con ella, su ineptitud para afrontar las tareas institucionales. Este ha sido el caldo de cultivo para el surgimiento de los otros poderes. Algo muy parecido ocurre en el campo de la justicia, fundamento de la seguridad ciudadana y jurídica. Al garantizar la impunidad a los responsables de las violaciones de los derechos humanos, cometidas durante la guerra civil, en particular a los militares y políticos, vinculados al poder dominante, abrió la puerta para una administración discrecional de la justicia. Entonces, no sólo los violadores gozaron de impunidad, sino también toda clase de criminales, los vinculados al poder y los desprotegidos. A continuación, la lógica del poder político se encargó de erosionar el sistema judicial hasta volverlo insignificante.

Los llamados a la unidad nacional son frecuentes y provienen de voces diversas. Todos llaman a trabajar por la superación de la polarización política para enfrentar la crisis de la seguridad ciudadana y para establecer una agenda nacional, donde los problemas socioeconómicos sean prioritarios. No obstante la unanimidad e insistencia, son llamados generales, sin destinatario definido y sin señalar tiempos, lugares o procedimientos. Ninguno de estos llamados, los cuales se remontan al gobierno anterior, ha terminado en una mesa de negociación. Cada nueva invitación es menos creíble que la anterior. Serían necesarios gestos irrefutables de parte de quienes tienen el poder de decidir para superar tanta incredulidad y desconfianza. Sin ir más lejos, la modificación de la legislación que regula el ahorro de las pensiones para crear un fideicomiso fue impuesta. Pese a la trascendencia del cambio, en la decisión sólo participaron unos cuantos funcionarios y las corporaciones propietarias de las administradoras de los fondos. Los políticos no fueron tomados en cuenta. A los diputados se les ordenó limitarse a revisar la redacción de la ley. El afectado principal, el empleado, fue excluido. Una presidencia del poder ejecutivo que entiende

la labor legislativa en términos tan triviales, no está interesada en la unidad nacional. En la práctica, la dirección del gobierno de ARENA pide siervos obedientes a sus órdenes. Para ella, diálogo equivale a aceptar sus decisiones sin discusión y, por lo tanto, la unidad consiste en asumirlas como propias.

La gran debilidad del poder ejecutivo y de quien lo preside es haber tolerado que los grandes capitales primero, y luego, las grandes corporaciones, le arrebataran el poder real. Por eso, el presidente Saca no puede discutir temas tan críticos como la situación de la hacienda pública, la seguridad ciudadana y jurídica, el endeudamiento del país, el financiamiento de la agenda social, la reforma electoral, el poco crecimiento de la economía, la descentralización del gobierno nacional o cualquier otra cuestión determinante para el bienestar de la ciudadanía y el desarrollo. Aun cuando el mandatario tuviera intención de discutir esta problemática, las grandes corporaciones transnacionales no se lo permitirían. Si por casualidad se atreviera a desafiarlas, las presiones privadas serían insostenibles y las que pueden ejercer por medio de las grandes empresas mediáticas tienen poder como para abortar cualquier iniciativa genuina de diálogo sobre la problemática nacional.

No obstante el inmenso poder constitucional que detenta, el poder ejecutivo no puede dar un paso importante sin la aprobación previa de los representantes de las corporaciones. Estos no sólo ejercen un control férreo sobre el presidente de ARENA, sino que, además, tienen poder de veto en las investigaciones del Fiscal General y en las sentencias de la Corte Suprema de Justicia. Por lo tanto, dada la correlación de fuerzas, la neutralización de los poderes paralelos y el fortalecimiento de la institucionalidad dependen de la aquiescencia de este poder corporativo, el más determinante de todos los existentes. Es así como el Estado salvadoreño se encuentra atrapado en un círculo vicioso, porque mientras el poder corporativo no lo decida, el proceso de desintegración continuará imparable; pero para detenerlo, él es el primero que debe acatar la institucionalidad, lo cual es muy poco probable, porque el sometimiento de esta última a sus intereses es clave para el modelo de acumulación. De todas formas, el interlocutor indispensable en la discusión de una agenda nacional o de un plan de desarrollo nacional no es tanto el presidente del poder ejecutivo como los representantes del capital corporativo.

La ruptura de este círculo vicioso no es sencilla, porque los altos funcionarios del gobierno de ARENA, incluido el presidente Saca, están vinculados al gran capital por relaciones de negocios y, a veces, también familiares y porque las finanzas del partido dependen de sus aportaciones. Los políticos de la derecha no pueden sobrevivir en el poder sin ellas, y el gran capital no puede mantener el ritmo de acumulación sin ARENA al frente del poder ejecutivo. A ambos les conviene mantener el círculo vicioso, cerrando así cualquier posibilidad para transformarlo. La desintegración del Estado y la subsiguiente proliferación de poderes paralelos

Los poderes paralelos, al mismo tiempo que fragmentan el país en territorios “liberados”, reducen el Estado a la impotencia.

En este momento, aun cuando lo intentara con voluntad política firme, el Estado no tiene fuerzas para reaccionar y, al menos, reconstituir su unidad política y social.

era un factor con el cual no contaban. De hecho, hasta ahora, no le habían prestado mayor atención, tal vez pensando que era un fenómeno pasajero. Pero no sólo no lo es, sino que, además, tiende a crecer y a extenderse, al punto de amenazar la viabilidad de su plan estratégico. Algunos de los sectores más conscientes del capital ya han advertido el peligro y han dado la voz de alarma. Pero estos llamados, así como también el de la embajada estadounidense, no han calado aún en las altas esferas del poder económico y político.

El gobierno de ARENA, por su lado, no se cansa de repetir que el FMLN levanta obstáculos que le impiden la buena administración y el cumplimiento de sus promesas electorales. La tesis gubernamental atribuye al FMLN la responsabilidad de la problemática nacional. Pero el peor enemigo del presidente Saca y de su gobierno no es el FMLN, su principal adversario político, sino aquellos más cercanos a ellos. No deja de ser desusado que el grupo con acceso directo a los despachos de Casa Presidencial y de los ministerios sea el peor enemigo del buen gobierno. Pero este grupo decide, en última instancia, la candidatura presidencial de ARENA, financia su campaña con varios millones de dólares y aprueba su programa de gobierno y, además, probablemente también promete ayuda. Él decide quiénes integran el gabinete y quiénes permanecen en él. Asimismo, señala quiénes son investigados por corrupción y también a quién destruyen o protegen las empresas mediáticas. Son los hombres —es poco probable que en este círculo exclusivo haya mujeres— más cercanos al mandatario con quien quizás también este comparte mesa, fiestas y duelos.

En virtud de esta injerencia en ARENA y en el gobierno, ese grupo considera que la presidencia del poder ejecutivo y, dado el inmenso poder que el régimen presidencialista otorga a quien la detenta, también el resto del gobierno son de su propiedad o están a su servicio exclusivo. Por lo tanto, en la agenda presidencial no hay espacio ni tiempo ni siquiera para los dirigentes de los partidos políticos. Los “hombres del presidente” son muy celosos, pues una “mala” influencia puede traer consecuencias desagradables para ellos. Sin embargo, no le proporcionan la ayuda prometida. No sólo se han negado sistemáticamente a pagar impuestos, sino que evaden o eluden con total impunidad aquellos que deben pagar, así como también evitan cumplir con sus obligaciones laborales como, por ejemplo, las cotizaciones de sus empleados al seguro social y al fondo de pensiones o los abonos a deudas contraídas en el sistema bancario. Por lo mismo, están en contra de cualquier nuevo impuesto que recorte sus abultadas ganancias. Al parecer, consideran que sus obligaciones fiscales están bien servidas con su contribución a las finanzas de ARENA, las cuales se complementarían con el patrocinio de escuelas, fundaciones, centros de tipo diverso, competencias deportivas, actividades asistenciales o caritativas, etc. Sin negar los beneficios que puedan derivarse de estos patrocinios, por encima de ellos está la obligación de contribuir al fisco, según su capacidad económica, empresarial e individual, así como también el cumplimiento de sus obligaciones laborales. Cuando el financiamiento de los partidos políticos sea sometido al escrutinio público saldrá a relucir cómo ARENA retribuye a sus donantes con cargos públicos, con ciertos nombramientos, que no son más que prebendas políticas, o con legislación particular o con la

impunidad. Igualmente, la contribución de gobiernos y partidos políticos extranjeros será del conocimiento público, con lo cual aquellos a quienes perturba esta clase de interferencias en el proceso electoral podrán dormir tranquilos. Aparte de lo que una buena legislación sobre los partidos políticos pueda prohibir, la publicidad de sus finanzas reducirá el monto de estas donaciones de forma apreciable. Entonces, la competencia electoral será librada de una forma más equitativa y tanto los grandes empresarios como los altos funcionarios podrán hablar de transparencia con propiedad.

Aun cuando los hombres del presidente Saca se resisten a pagar impuestos, le exigen infraestructura de primer mundo, condiciones favorables para el desarrollo de sus empresas, es decir, exenciones fiscales que, en definitiva, son un costo para el Estado y constituyen un agravio comparativo para quienes no sólo están excluidos de ellas, sino que, además, sufren sus consecuencias. También exigen educación y salud, seguridad ciudadana, estabilidad política, instituciones fuertes y demás servicios básicos baratos. Además, el presidente del gobierno de ARENA está obligado a colocar en los altos puestos de gobierno a gente de confianza, a los representantes del gran capital y a los contribuyentes más fuertes del partido. De esta forma, la dirección del gobierno no recae necesariamente en los más capaces, sino en los que más dinero tienen y menos contribuyen, con bastante frecuencia incompetentes y oportunistas. Al final del ciclo, la falta de fondos y la incompetencia se constituyen en dos obstáculos insalvables para quien desee hacer un buen gobierno.

Esta situación, sostenible de alguna manera, durante los gobiernos anteriores, ya no lo es. El gobierno actual ya ni siquiera puede responder a las demandas de las corporaciones y de las grandes empresas. Dicho de otra manera, estas, al igual que la mayor parte de la ciudadanía, exigen un buen gobierno, pero no están dispuestas a pagar para ello, ni a renunciar a exigir que la administración pública esté en manos de incapaces y aprovechados, ni asumen su responsabilidad por la erosión de la institucionalidad. No son, pues, el FMLN y su tozudez los obstáculos que impiden al gobierno de ARENA desarrollar su plan de trabajo, sino que sus peores enemigos son los hombres y los colaboradores más cercanos al presidente de poder ejecutivo. Su poder es tal, que solamente las amenazas que ponen en peligro la viabilidad del plan actual pueden forzar un cambio en la dirección correcta. Está demostrado que la represión no es el instrumento más adecuado, lo cual ya es un avance importante para una mentalidad autoritaria. Tampoco se puede esperar mucho, al menos por ahora, de una sociedad desengañada y desanimada, cuya mayoría sólo ve la alternativa de abandonar el país. El único camino es la reforma del Estado, una especie de refundación, orientada a fortalecer su institucionalidad.

San Salvador, 26 de octubre de 2006.